

Julio 2025

Global Tax Trends

Noticias relevantes de
tributación internacional

Impuestos Internacionales

© 2025 Grant Thornton Chile



Chile y Paraguay avanzan en la modernización de su Convenio para Evitar la Doble Tributación

En junio de 2025, delegaciones del **Servicio de Impuestos Internos (SII)** y del Ministerio de Relaciones Exteriores de Chile, junto con representantes de la **Dirección Nacional de Ingresos Tributarios (DNIT)** de Paraguay, iniciaron una ronda de negociaciones para actualizar el Convenio para Evitar la Doble Tributación (CDT) vigente entre ambos países.

Este proceso responde al compromiso asumido en la carta de intención firmada el 17 de julio de 2024, en la cual las autoridades de ambos estados acordaron iniciar un proceso de revisión orientado a alinear el texto del convenio con los estándares tributarios internacionales más recientes.

Según declaraciones de la DNIT, el objetivo principal de esta actualización es adecuar el tratado a los lineamientos de la OCDE y la ONU, con el propósito de fortalecer la cooperación bilateral, otorgar mayor seguridad jurídica a los inversionistas y residentes de ambos países, y prevenir de forma más eficaz prácticas de planificación fiscal abusiva en operaciones transfronterizas.

En este contexto, cabe recordar que Chile ha avanzado en la modernización de su red de convenios mediante la ratificación del **Instrumento Multilateral (MLI)** en julio de 2020, que permite incorporar automáticamente cláusulas orientadas a prevenir abusos de los tratados —como el treaty shopping— y a reforzar los mecanismos de solución de controversias, siempre que la contraparte también haya ratificado el MLI.

El convenio entre **Chile y Paraguay** se encuentra en vigor desde 2009, contemplando disposiciones que se apartan de las prácticas más recientes adoptadas por nuestra legislación.



Por ejemplo, en materia de intereses, el tratado establece una tasa máxima de retención del 5% para pagos a instituciones financieras, y de 15% para otros beneficiarios. En contraste, los tratados más recientes firmados por Chile contemplan tasas de 4% y 10%, respectivamente. Lo anterior, toda vez que la Cláusula de la Nación más Favorecida o CNF contenida en el protocolo de este CDT, no resulta aplicable.

Será clave observar la evolución de estas negociaciones para determinar si se introducen cambios relevantes en los tratamientos tributarios aplicables —como tasas sobre dividendos, intereses o regalías— y qué cláusulas estándar internacionales serán finalmente incorporadas. Este proceso se enmarca en la política sostenida de Chile de actualizar su red de tratados y profundizar su compromiso con la cooperación fiscal internacional.

Trump da marcha atrás con su propuesta de “revenge tax”, reconfigurando el panorama de cooperación fiscal internacional

En un movimiento que sacudió los círculos económicos globales, la administración del presidente de Estados Unidos, **Donald Trump**, anunció a finales de junio de 2025 la cancelación del propuesto revenge tax. Esta decisión, combinada con un nuevo acuerdo del **G7** que exime a las principales empresas estadounidenses de ciertos impuestos globales, ha generado alivio en mercados como el de los fondos de pensiones australianos, pero también críticas por socavar un histórico acuerdo fiscal multilateral alcanzado en 2021.

El revenge tax, incluido en la legislación estadounidense bajo la **Sección 899 del proyecto de ley conocido como One Big Beautiful Bill** —un extenso paquete fiscal y de gasto de más de 1.000 páginas—, buscaba contrarrestar lo que la administración Trump consideraba “impuestos extranjeros injustos o discriminatorios” contra empresas y ciudadanos estadounidenses. La medida, oficialmente titulada “Cumplimiento de Remedios contra Impuestos Extranjeros Injustos”, permitía a EE.UU. imponer gravámenes adicionales a entidades de países señalados como discriminatorios. Por ejemplo, la propuesta contemplaba impuestos sobre ingresos por servicios digitales (como la monetización de datos y la publicidad en línea), así como un gravamen mínimo más elevado sobre las ganancias de entidades extranjeras, incluso si estas se generaban fuera del país. Esto habría impactado flujos de ingresos pasivos —como intereses y dividendos—, desincentivando la inversión internacional en países considerados problemáticos por Washington.

En el caso de **Australia**, el sector de fondos de pensiones (superannuation), que administra billones de dólares en activos, manifestó gran preocupación por el impacto de la medida en los rendimientos de sus inversiones en EE.UU. Líderes de la industria advirtieron que el impuesto podría haber provocado una venta masiva de activos estadounidenses, generando efectos sistémicos más amplios. En Europa, a su vez, los analistas alertaron sobre el riesgo de represalias comerciales y un alza en los costos para los consumidores, lo que habría complicado aún más las cadenas de suministro globales.

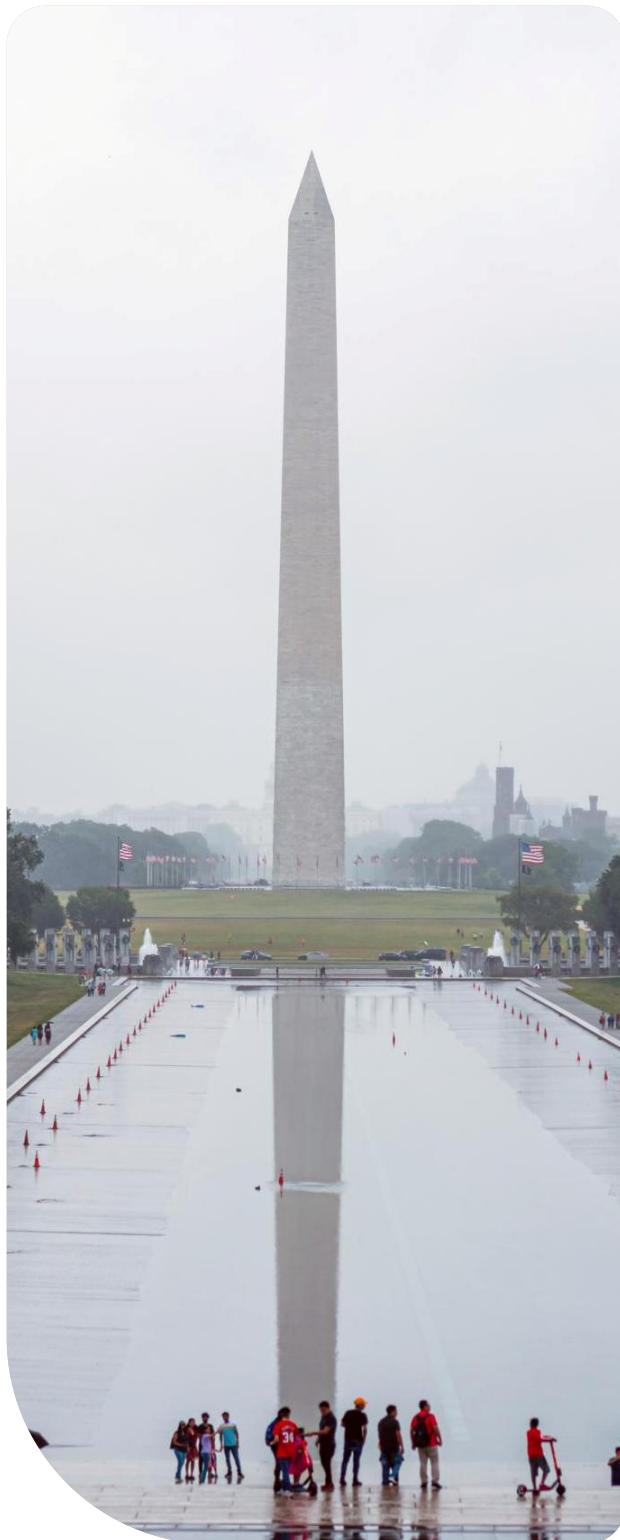
Coincidentemente, y en paralelo a la cancelación del controversial impuesto, el **G7** anunció un acuerdo que exime a las grandes empresas estadounidenses de ciertos aspectos del **Pilar Dos** del acuerdo fiscal global de 2021 liderado por la **OCDE**, que establece un impuesto mínimo global del 15% para multinacionales de gran tamaño. Este nuevo “enfoque paralelo” reconoce que los impuestos pagados por empresas de EE.UU. en su jurisdicción cumplen parcialmente con los requisitos del **Pilar Dos**.

El **Secretario del Tesoro de Estados Unidos, Scott Bessent**, justificó la eliminación del revenge tax argumentando que las modificaciones al **Pilar Dos** permitirán a las empresas de su país ahorrar aproximadamente 100 mil millones de dólares en impuestos a gobiernos extranjeros durante la próxima década.

Dado lo señalado más arriba, la cancelación del revenue tax ha sido especialmente bien recibida en Australia, donde los fondos de pensiones celebraron la protección de los ahorros de millones de jubilados. La medida también ha contribuido a aliviar tensiones con socios comerciales estratégicos, evitando posibles represalias que habrían afectado las relaciones económicas transatlánticas y transpacíficas. Sin embargo, el nuevo enfoque del G7 ha reactivado el debate sobre la tributación de la economía digital, un punto de fricción persistente entre EE.UU. y los países que buscan gravar a gigantes tecnológicos.

Mientras la administración Trump evalúa alternativas para fomentar la inversión doméstica sin recurrir a medidas unilaterales, los mercados internacionales observan con atención las próximas discusiones en la OCDE.

A mediados del mes de julio, y como respuesta a estos hechos, **el Canciller alemán Friedrich Merz** instó a la UE a suspender la implementación de un impuesto mínimo global, argumentando que el plan –parte del Pilar 2– ya no sería viable sin la participación de los EE.UU. y que podría poner a este continente en desventaja frente a este país.



Bolivia se incorpora al Foro Global de Transparencia Tributaria de la OCDE

El 4 de junio de 2025, la OCDE anunció la incorporación de Bolivia como miembro pleno del **Foro Global sobre Transparencia e Intercambio de Información con Fines Fiscales**. Con esta adhesión, Bolivia se convirtió en el miembro número 176 del Foro y en el país número 16 de América Latina en sumarse a esta iniciativa multilateral.

El Foro Global fue creado en el año 2000 con el objetivo de desarrollar, promover y supervisar la implementación de estándares internacionales de transparencia tributaria a nivel mundial. Su labor se estructura en tres ejes principales:

- (i) la promoción de dichos estándares;
- (ii) la evaluación del cumplimiento por parte de los países miembros; y
- (iii) la asistencia técnica a economías en desarrollo para implementar efectivamente estos estándares.

La incorporación de Bolivia representa un paso relevante en su compromiso por adoptar prácticas internacionales en materia tributaria, en particular respecto del intercambio de información fiscal. Esta decisión también tiene implicancias directas en el contexto chileno, dado que, el SII mediante la Resolución Exenta N°30 de 2025, incluyó a Bolivia en el listado de territorios considerados como regímenes fiscales preferencias a contar del 1° de enero de este año.

Según la legislación chilena, del artículo 41 H de la **Ley sobre Impuesto a la Renta**, un territorio será calificado como régimen fiscal preferencial si cumple, de manera concurrente, con dos condiciones:

- (a) no haber celebrado con Chile un convenio que permita el intercambio efectivo de información tributaria, o que dicho convenio no esté vigente o presente limitaciones sustanciales; y,
- (b) no ser considerado como “cumplidor” o “sustancialmente cumplidor” en materia de transparencia tributaria, conforme a las evaluaciones del Foro Global u otro organismo internacional equivalente del cual Chile sea miembro permanente.



¿Es constitucional el Impuesto a los Servicios Digitales?

El **Consejo Constitucional de Francia** se pronunciará sobre la constitucionalidad del impuesto a los servicios digitales (**Digital Services Tax, DST**), una revisión que se origina a partir de una remisión efectuada el 17 de junio de 2025 por el Consejo de Estado, en el marco de un recurso presentado por un contribuyente que solicitó la devolución del impuesto pagado. En dicho proceso, el reclamante planteó que la norma vulnera principios fundamentales establecidos en la Constitución francesa.

Según el contribuyente, el DST infringe derechos garantizados por la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano de 1789, en particular los contenidos en sus artículos 6 y 13, que consagran el principio de igualdad ante la ley y una distribución equitativa de las cargas públicas.

Las objeciones presentadas se estructuran en tres ejes principales:

- (i) la violación del principio de igualdad y no discriminación;
- (ii) la desproporción del impuesto respecto de la capacidad contributiva; y,

- (iii) las limitaciones prácticas para que los contribuyentes extranjeros ejerzan control y defensa efectiva sobre su situación tributaria.

Entre otros argumentos, se plantea que el DST establece diferencias injustificadas entre plataformas digitales y prestadores tradicionales; que las reglas territoriales para atribuir el uso del servicio carecen de objetividad; que se generan inconsistencias entre empresas sujetas al impuesto sobre sociedades y aquellas gravadas por el DST; y que los umbrales financieros definidos a nivel de grupo afectan de manera desproporcionada a determinadas estructuras empresariales frente a compañías más pequeñas o menos integradas.

El DST rige en Francia desde 2019. Se aplica a empresas que registran ingresos globales anuales superiores a 750 millones de euros, de los cuales al menos 25 millones deben generarse en territorio francés. La norma establece una tasa del 3% sobre los ingresos derivados de ciertos servicios digitales, tales como la publicidad en línea, las plataformas de intermediación y la transmisión de datos generados por la interacción de los usuarios.

Este debate se produce en un contexto internacional marcado por el rechazo creciente a medidas tributarias unilaterales sobre servicios digitales. Por ejemplo, el 29 de junio el Ministro de Finanzas de Canadá anunció la derogación del DST en ese país, como parte de un esfuerzo por avanzar en un acuerdo comercial más amplio con Estados Unidos.

En la misma línea, el 18 de abril, el Presidente estadounidense **Donald Trump** y la **Primera Ministra italiana Giorgia Meloni** emitieron una declaración conjunta destacando la necesidad de evitar regímenes fiscales discriminatorios que afecten a los servicios digitales.

En este escenario, la decisión del **Consejo Constitucional francés** será clave para definir el futuro del DST en ese país. El fallo tendrá implicancias a nivel local y también podría influir en la postura de otros miembros de la Unión Europea, especialmente mientras continúa la discusión sobre la implementación del Pilar Uno del marco inclusivo impulsado por la OCDE.

Chile and Paraguay advance in modernizing their Double Taxation Treaty

In June 2025, **Chile's Fiscal Authority (SII)** and the Ministry of Foreign Affairs began a round of negotiations with **Paraguay's National Tax Revenue Directorate (DNIT)** aimed at updating the current double taxation treaty (DTT) between the two countries.

This process adheres to the commitment established on July 17, 2024, Letter of Intent. In this document, both parties agreed to review their treaty to ensure it aligns with the most recent international tax standards.

According to Paraguay's tax administration, the main objective of the revision is to adapt the agreement to the most recent guidance issued by the **OECD** and the **UN**. The goal is to strengthen bilateral cooperation, provide greater legal certainty for investors and residents of both countries, and more effectively prevent aggressive tax planning in cross-border transactions.

Notably, Chile has already taken significant steps to modernize its treaty network by ratifying the **Multilateral Instrument (MLI)** in July 2020. The MLI allows for the automatic inclusion of treaty provisions designed to prevent abuse, such as treaty shopping, and to enhance dispute resolution mechanisms, provided the other treaty partner has also ratified the instrument.

The DTT currently in force with **Paraguay**, effective since 2009, includes provisions that differ from those in more recent Chilean treaties. Regarding interest payments, for example, the treaty sets a maximum withholding tax rate of 5% for payments made to financial institutions and 15% for all other



payments. In contrast, Chile's newer agreements generally establish withholding tax rates of 4% and 10%, respectively. This, since the Most Favored Clause from this DTT is not applicable.

It is important to monitor the outcome of these negotiations in order to assess whether specific tax treatments, such as those applicable to dividends, interest, or royalties, are modified and which international standards are ultimately adopted. This process reflects Chile's ongoing policy to modernize its tax treaty network and strengthen its commitment to international tax cooperation.

Trump Backtracks on “revenge tax”, Reshaping the Landscape of International Tax Cooperation

In a move that sent shockwaves through the global economy, the administration of the US **President Donald Trump** announced the cancellation of the proposed revenge tax in late June 2025. This decision, paired with a new **G7** agreement exempting major U.S. companies from certain global tax obligations, has brought relief to markets such as Australia’s pension fund sector. However, it has also drawn criticism for undermining the historic 2021 global tax deal.

Outlined in **Section 899 of the sweeping fiscal and spending bill** known as the **One Big Beautiful Bill**, the revenge tax was designed to counter what the Trump administration deemed “unfair or discriminatory foreign taxes” imposed on U.S. businesses and citizens. The official name of the provision was **Remedial Measures Against Unfair Foreign Taxation Act**. It would have allowed the US to impose additional taxes on entities from discriminatory jurisdictions. It targeted revenue from digital services, such as data monetization and online advertising, and it introduced a higher minimum tax on foreign entities’ profits, even if they were generated outside U.S. borders. This would have impacted passive income flows, such as interest and dividends, discouraging international investors from operating in jurisdictions deemed problematic by Washington.

In **Australia**, the superannuation sector, which manages trillions of dollars in assets, expressed deep concern because the tax could reduce returns on U.S.-based investments. Industry leaders warned that the measure might have triggered a large-scale sell-off of U.S. assets, which could have caused broader economic repercussions. In Europe, analysts emphasized

the potential for retaliatory trade measures and increased consumer costs, which could further strain global supply chains.

The **G7** announced a political agreement exempting large U.S. companies from certain aspects of the OECD-led 2021 global tax deal, coinciding with the cancellation of the controversial U.S. tax proposal. Specifically, the agreement exempts these companies from Pillar Two, which establishes a 15% global minimum tax for large multinational enterprises. This new “parallel approach” acknowledges that U.S. corporate taxes partially fulfill the requirements of Pillar Two.

U.S. Treasury Secretary Scott Bessent defended repealing the revenge tax, arguing that revisions to Pillar Two will save American companies approximately \$100 billion dollars in foreign tax liabilities over the next decade.

The cancellation of the revenge tax was particularly well-received in Australia, where pension funds applauded the protection of retirees’ savings. This decision also eased tensions with key trading partners and avoided potential retaliatory actions that could have disrupted transatlantic and transpacific economic relations. However, the G7’s shift has reignited the debate over digital taxation, a longstanding point of contention between the U.S. and countries seeking to tax American tech giants.

While the Trump administration is exploring alternative measures to boost domestic investment without resorting to unilateral actions, global markets are closely following the upcoming OECD discussions.

In mid-July, in response to these developments, **German Chancellor Friedrich Merz** urged the EU to suspend the implementation of a global minimum tax, arguing that the plan - part of Pillar 2 - would no longer be feasible without US participation and could put the EU at a disadvantage vis-à-vis the US.



Bolivia Joins the OECD's Global Forum on Tax Transparency

On June 4, 2025, OCDE announced that Bolivia had become a full member of the **Global Forum on Transparency and Exchange of Information for Tax Purposes**. Bolivia is now the 176th member of the Forum and the 16th Latin American country to join the multilateral initiative.

Established in 2000, the Global Forum aims to develop, promote, and monitor the implementation of international tax transparency standards. Its work is organized around three main pillars:

- (i) promoting global standards on tax transparency;
- (ii) monitoring and assessing member countries' compliance, and
- (iii) providing technical assistance to developing countries to support implementation and enforcement.

Bolivia's membership signals its commitment to aligning tax policy with international standards, particularly regarding the exchange of tax information. This development also has implications for Chile's tax framework.

Bolivia was included by the SII on the list of jurisdictions classified as preferential tax regimes via Resolution No. 30 of 2025, effective January 1st, 2025.

According to Chilean legislation, **article 41 H of the Chilean Income Tax Law**, a jurisdiction is deemed a preferential tax regime if it meets two conditions simultaneously:

- (a) It hasn't signed a tax information exchange agreement with Chile; or the agreement isn't into force, or it contains limitations that prevent effective exchange, and
- (b) It doesn't qualify as "compliant" or "largely compliant" with international standards on transparency and information exchange based on assessments conducted by the Global Forum or another equivalent body of which Chile is a permanent member.

Bolivia's recent accession to the Global Forum may be seen as progress toward fulfilling the second condition. However, for Bolivia to be removed from Chile's list of preferential tax regimes, a bilateral agreement enabling the effective exchange of tax information must be signed with Chile in the future. This would satisfy the first condition set out in our national law.



Is the Digital Services Tax Constitutional

France's **Constitutional Council** is set to rule on the constitutionality of the **Digital Services Tax (DST)**. This review follows a referral submitted on June 17, 2025, by the Council of State in connection with a taxpayer's claim for a refund of previously paid DST. The taxpayer challenged the tax's compatibility with France's constitutional principles in that case.

The claimant argues that the DST violates rights guaranteed by the 1789 Declaration of the Rights of Man and of the Citizen, particularly Articles 6 and 13, which enshrine the principles of equality before the law and fair distribution of public burdens.

The objections are structured around three key arguments:

- (i) violation of the principles of equality and non-discrimination;
- (ii) lack of proportionality with respect to the taxpayer's ability to pay; and
- (iii) practical limitations that prevent foreign taxpayers from effectively controlling and challenging their tax obligations.

The claimant argues that the DST creates unjustified distinctions between digital platforms and traditional service providers, that the territorial rules used to allocate taxable services lack objectivity, that the tax results in disparities between companies subject to corporate income tax and those subject to the DST, and that the revenue thresholds defined at the group level disproportionately impact certain business structures compared to smaller or less integrated companies.

The DST has been in force in France since 2019. It applies to companies with global annual revenues exceeding €750 million, of which at least €25 million must be generated in France. It is levied at a rate of 3% on revenues derived from certain digital services, such as online advertising, intermediary platforms, and the transmission of user-generated data.

The constitutional challenge occurs in an international context that is increasingly unfavorable to unilateral digital tax measures. On June 29, **Canada's Minister of Finance** announced the repeal of the country's digital services tax (DST), as part of broader trade negotiations with the United States.

Similarly, on April 18, U.S. President Donald Trump and Italian Prime Minister Giorgia Meloni issued a joint statement emphasizing the importance of avoiding discriminatory tax regimes targeting digital services.

Against this backdrop, the decision by France's Constitutional Council will be pivotal in determining the future of the DST. The ruling could impact not only its domestic validity but also influence other countries' positions and the broader debate within the European Union, particularly as discussions on the scope and implementation of Pillar One under the OECD Inclusive Framework continue.



Contáctanos

Contact us



Francisca Pérez

Tax Lead Partner

francisca.perez@cl.gt.com



Oliver San Juan

International Tax Partner

oliver.sanjuan@cl.gt.com

Av. Presidente Riesco 5335, Oficinas
603/402, Las Condes, Santiago, Chile.

contacto@cl.gt.com

+56 2 3375 8742

www.grantthornton.cl

